

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	858
RADICACION:	11001-33-35-027-2020-00288-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JOSÉ VICENTE CUINTACO ARDILA
DEMANDADO:	DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ-SECRETARÍA DE GOBIERNO
ASUNTO:	Resuelve excepción previa de caducidad

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Gobierno, en la contestación de la demanda, propuso la excepción mixta de caducidad, la cual se decidirá en seguida teniendo en cuenta lo reglado en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos 100 a 102 del CGP.

La parte demandada indicó que la Resolución No. 0153 del 10 de febrero de 2020 fue notificada el 17 de febrero de 2020 y que la parte demandante con el fin de incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 26 de junio de 2020, con lo cual superó el término para demandar, que era de cuatro (4) meses, tal como lo prevé el artículo 164, literal c, del CPACA.

Agregó que el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspendió desde el 16 de marzo de 2020 los términos para interponer demandas; empero, la Procuraduría General de la Nación durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional brindó la posibilidad de presentar solicitudes de conciliación extrajudiciales y de asistir a las audiencias virtuales, razón por la cual considera que nunca se suspendieron los términos de prescripción y caducidad para ese tipo de trámites administrativos¹.

E, efecto, el artículo 164, numeral 2, literal d, del CPACA, consagra que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses, contado a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones previstas en otras disposiciones legales.

Algunas de tales salvedades figuran precisamente en el numeral 1º de ese precepto legal, al prever que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, situación que no ocurre en el presente asunto, por lo que debe estudiarse conforme a la regla general establecida en la norma.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, en providencia del 21 de enero de 2021, radicado interno No. 3329-20, expuso sobre este tópico lo siguiente:

"Esta sección, referente al fenómeno jurídico de la caducidad, precisó lo siguiente:

¹ Documento digital "18.ContestacionDemanda.pdf"

«La caducidad genera la extinción del derecho de acción por el transcurrir del tiempo; de manera tal que la demanda debe ser presentada dentro del término de ley, en aras a salvaguardar el interés general y la seguridad jurídica. Sin embargo, dicho lapso concluye ante la inactividad de quien encontrándose legitimado en la causa, no acciona en tiempo; por lo que la caducidad se presenta como un límite al ejercicio del derecho de acción del ciudadano».

En efecto, la caducidad se refiere al término de orden público que tiene el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del derecho de acción; su finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio, lo que impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas. Lo anterior se justifica en la necesidad de obtener seguridad jurídica.

Es importante manifestar que la caducidad se suspende por una sola vez con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3º del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009.

Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento, cuando se trata del retiro del servicio, el momento de la desvinculación resulta ser de trascendental importancia, teniendo en cuenta que marca el límite temporal de terminación de la vinculación laboral con la entidad y, bajo ese entendido, es allí donde se materializa para el interesado la presunta lesión a su derecho subjetivo.

Así, el término de caducidad cuando se trata de asuntos como el que ahora ocupa la atención de la subsección, no se contabiliza a partir de la notificación o comunicación de un acto administrativo, sino a partir del día siguiente a aquel en que materialmente se produjo la desvinculación del servicio, es decir, la terminación de la relación laboral". (Subrayado fuera de texto).

Debe advertirse que la Ley 640 de 2001 contempló la suspensión de los términos de caducidad y prescripción, en tanto se surte la conciliación extrajudicial. Veamos:

"ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable".

El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, en cuyo artículo 9 dispuso:

"Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias, según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Público.

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no corre el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios de control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.

Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el Comité de Conciliación contará con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.

Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo". (Subrayado fuera de texto).

El Gobierno Nacional también expidió el Decreto Legislativo 564 de 2020 y decretó la suspensión de los términos de prescripción y caducidad, en las siguientes condiciones:

"Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente (...)"

De otra parte, se advierte que mediante Memorando No. 2020410089623 del 2 de marzo de 2020, la Directora de Gestión de Talento Humano de la Secretaría de Gobierno de Bogotá le informó al señor José Vicente Cuintaco Ardila que "[d]e acuerdo con la Resolución No. 0153 de 2020 que le fue comunicada por correo electrónico el 17 de febrero de 2020, su nombramiento provisional se daría por terminado una vez el señor CARLOS CESAR WILCHES BENITEZ, tomará posesión del empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24, situación que ocurrió el **27 de febrero de 2020**"². (Negrilla fuera de texto).

De conformidad con los citados preceptos normativos y aparte jurisprudencial y las pruebas aportadas al expediente, se concluye que el 26 de febrero de 2020 se produjo la terminación de la relación laboral, toda vez que el 27 de febrero de 2020 se posesionó la persona que fue nombrada en periodo de prueba para ejercer el cargo de profesional especializado, código 222, grado 24 de la planta global de la Secretaría de Gobierno, en reemplazo del demandante, motivo por el cual se tendrá esa fecha como punto de partida para contabilizar el término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en la ley para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, pues fue el día siguiente a aquel en que materialmente se causó la desvinculación del servicio, es decir, cuando se ejecutó el acto administrativo acusado.

Definido lo anterior, la parte actora contaba en principio hasta el 27 de junio de 2020 para impetrar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero como el 26 de junio de 2020 radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante el agente del Ministerio Público, se suspendió el término de caducidad faltando un (1) día para su vencimiento, y como por mandato legal debe descontarse el tiempo que demandó el trámite conciliatorio, es decir, el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2020 y el 22 de octubre de 2020, día en el que se expidió la constancia de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, es claro que

² Folio 4 del documento digital "04.AnexoDemandaNRD20200028800".

al actor le restaba un (1) día para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y como lo hizo el 23 de octubre de 2020, como consta en el acta de reparto que obra en el documento digital "05.ActaRepartoNRD20200028800", tal acción fue promovida oportunamente, de manera que el medio exceptivo formulado por la parte demandada no se configuró y, por ende, deviene infundado.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR infundada la excepción de caducidad formulada por el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Gobierno.

SEGUNDO: RECONOCER a la Dra. Edith Yanire Bautista Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.045.448 y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 226429 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Gobierno, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en los documentos digitales "19.Poder" y "20.AnexosPoder.pdf".

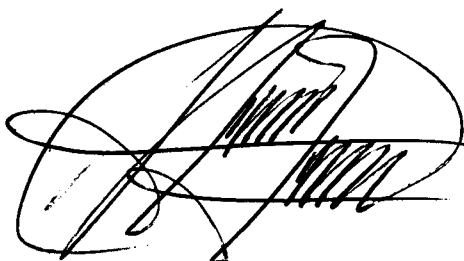
TERCERO: REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.

Los memoriales suscritos por los apoderados de las partes deben ser enviados únicamente al correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales deberán contener los 23 dígitos del proceso, el juzgado al cual se dirige, las partes y no podrán exceder de 5000 KB.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

Se conserva registro del original de esta providencia en la ubicación compartida de almacenamiento virtual de este juzgado.

NOTIFÍQUESE



HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

AHSC